



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

RESOLUCIÓN NÚMERO 168543 DE 2025

(04 de diciembre 2025)

"Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

**LA DIRECTORA (E) DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Que, la Dirección de Otras Prestaciones, en el marco de la competencia conferida en el artículo 6 de la Resolución 1012 del 20 de mayo de 2022; modificado por la Resolución 0031114 del 28 de noviembre de 2023, mediante la **RESOLUCIÓN No. 14229 del 3 de abril de 2024**, ordenó el cobro de las reclamaciones **12296113 12301537 12301807 12330943 12372002 12314067 y 12313526** en contra del señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.738** por la suma de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$ 40.220.294,00 m/cte.)** por concepto de gastos médico quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización de víctimas de accidente de tránsito acaecido el día 7 de noviembre de 2020, en el cual se vio involucrado el automotor tipo motocicleta identificado con la placa **GDK19C** el cual no contaba con la respectiva póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2 Que, mediante el radicado **20241220295281** del 6 de mayo de 2024 se envía citación para notificación personal de la **Resolución No. 14229 del 3 de abril de 2024** a nombre del señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, siendo esta entregada el día 19 de junio de 2024 según guía **RA478843570** por los **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4»72.**
- 1.3 Que, al no haber pronunciamiento alguno por parte del señor **ARCON ARIZA**, a través del radicado **20241224631761** del 30 de julio de 2024, se realiza notificación por **AVISO** de dicha resolución la cual fue entregada el 16 de septiembre de 2024 acorde con la guía RA491732825CO emitida por los **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4»72.**
- 1.4 Que, surtida la notificación por **AVISO** el mencionado interpuso recurso de reposición en contra de la **Resolución No. 14229 del 3 de abril de 2024**, allegado a esta entidad el 18 de septiembre de 2024 con radicado 20246307963162; en la cual solicita sea eximido de la obligación endilgada por no ser el propietario del vehículo para la fecha del accidente de tránsito.
- 1.5 Que, una vez ejecutoriada el aludido acto administrativo; a través de la **RESOLUCIÓN No. 175106** del 24 de noviembre de 2024, libró mandamiento de pago en contra del señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA** en virtud de lo dispuesto en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario.
- 1.6 Que, el señor **BERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, solicita se declare la caducidad respecto a las reclamaciones **12296113 12301537 12301807 12330943 12372002 12314067 y 12313526** contempladas en **RESOLUCIÓN No. 14229 del 3 de abril de 2024.**

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

1.7 Que, la señora **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, solicita se declare la caducidad respecto a las reclamaciones **12296113 12301537 12301807 12330943 12372002 12314067 y 12313526** contempladas en **RESOLUCIÓN No. 14229 del 3 de abril de 2024**.

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

Ahora bien; con respecto a la procedencia de la Revocatoria Directa; es importante indicar que esta corresponde a un mecanismo de control de legalidad, otorgado a la administración para que la misma revoque sus propios actos administrativos bajo los parámetros establecidos en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011:

"(...) Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte... (...)"

A su vez, la Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 1999, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

"(...) La revocación directa tiene como propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.

... La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona. (...)"

En el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

*"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, **bien sea por razones de legalidad** o por motivos de mérito (causales). **Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.).** Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibidem)". (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

Por otro lado; dentro de la relación que tiene la Revocatoria con el Debido Proceso, la Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública:

"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cubija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses". **(Negrilla y subrayado fuera de texto).**

Por su parte; el Consejo de Estado- Sala de lo Contenciosa Administrativa- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01 señalando lo siguiente:

"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativa) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. **(Negrilla y subrayado fuera de texto).**

3. DE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

El señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, solicita se declare la caducidad de la acción de repetición contemplada en la **RESOLUCIÓN 0014229 del 3 de abril de 2024** en los siguientes términos:

"(...) **PETICIONES**

2.3 DEL CASO CONCRETO

Conforme a lo anterior, a continuación, se presentan los argumentos que sustentan la solicitud de revocatoria directa de la **Resolución 14229 del 3 de abril de 2024**, frente a lo cual es preciso indicar que ésta fue emitida por la Dirección de Otras Prestaciones, en la que se impuso una obligación dineraria al suscrito por supuestos pagos realizados por la ADRES a una IPS producto de un presunto accidente de tránsito ocurrido el **7 de noviembre de 2020**, conforme a las siguientes reclamaciones:

Número de reclamación	Giro ADRES reclamación	Termino para expedir y notificar resolución	Fecha Resolución ADRES
12296113	26/03/21	26/03/23	3/04/24
12301537	26/03/21	26/03/23	3/04/24
12301807	26/03/21	26/03/23	3/04/24
12330943	22/06/21	22/06/23	3/04/24
12372002	21/09/21	21/09/23	3/04/24
12314067	26/10/21	26/10/23	3/04/24
12313526	26/10/21	26/10/23	3/04/24

Elaboración propia, con base en artículo primero de la Resolución No.14229 del 3 de abril de 2024

En tal sentido, se observa que los supuestos pagos realizado por la ADRES a la IPS por los servicios relacionados con el presunto accidente referenciado, se dieron el 26 de marzo de 2021, 22 de junio de 2021, 21 de septiembre de 2021 y 26 de octubre de 2021, por tanto, el plazo máximo que tenía

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

la autoridad para emitir el título valor a través de la repetición feneció el 26 de marzo de 2023, 21 de septiembre de 2023 y 26 de octubre de 2023, fechas muy anteriores a la fecha de expedición de la Resolución **14229**, la cual esta calendada del **3 de abril de 2024**.

Es decir, la ADRES emitió la Resolución sobre la que se solicita la revocatoria directa una vez caducado el término conferido por el legislador para tal fin; con dicha actuación desconocedora del ordenamiento, la entidad me impone una obligación monetaria que genera un agravio injustificado y que no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico, pues recuérdese que la administración no contaba con la facultad por dejar pasar el tiempo sin ejercer la repetición del cobro dentro de los términos establecidos.

Al respecto, conforme a la interpretación dada por el Consejo de Estado, en el presente caso estamos en presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento, el cual rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas contrariando el artículo 13 Constitucional.

Solo para efectos de claridad, en los términos del numeral 3° del artículo 93 del CPACA, el perjuicio o agravio injustificado en el presente caso, consiste en que la administración de forma abusiva y arbitraria me impuso la obligación de pagar la suma de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$ 40.220.294,00)**, aun cuando no era procedente a la luz de lo expuesto en líneas anteriores, lo que de manera concluyente afecta mi patrimonio personal, mi mínimo vital y el de mi núcleo familiar.

3. PETICIONES

PRIMERO: Conforme al numeral 3° del artículo 93 del CPACA **Revocar la Resolución No.14229 del 3 de abril de 2024** por causar agravio injustificado al suscrito, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente escrito.

SEGUNDO: COMUNICAR al Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica para que, en virtud de sus competencias, deje sin efectos las presuntas resoluciones, por medio de la cual se libró mandamiento de pago en contra de **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA** de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente escrito.

TERCERO: COMUNICAR al Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica para que en virtud de sus competencias levante las medidas cautelares iniciadas en contra de **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**.

CUARTO: DAR POR TERMINADA el procedimiento de cobro coactivo iniciado en contra de **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**. (...)”

4. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

4.1 DEL PROCEDIMIENTO

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos; en este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, o con cargo a la **ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados**.

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **la ADRES, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase**.

La facultad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas,

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1,4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).

Sobre el particular, es necesario reiterar, que el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó al Ministerio de Salud y Protección Social, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del entonces FOSYGA, hoy la ADRES, correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Nación -FOSYGA, con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

Así mismo, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por la ADRES, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho.
- b) No contar con la póliza SOAT.
- c) Existencia de víctimas.

Situación que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **7 de noviembre de 2020** y del cual se realizó el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, y se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, la ADRES pagara las reclamaciones **12296113, 12301537, 12301807, 12330943, 12372002, 12314067 y 12313526** contenidas en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de determinación del deudor contra el señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, propietario para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado, el cual no contaba con el respectivo Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT.

De otra parte, se precisa que para poder ordenar el cobro contra los **propietarios y/o conductores** cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, resulta necesario el reconocimiento y pago de reclamaciones a la IPS o a las víctimas o sus beneficiarios cuando se presente fallecimiento conforme al artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023 se tiene que:

"El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema."

RESOLUCIÓN NÚMERO 168543 DE 2025

HOJA No. 6 de 9

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

Es decir que, previo a desplegar las actuaciones administrativas tendientes a iniciar el cobro en contra de los obligados, las IPS deben efectuar la radicación de las reclamaciones ante la Entidad, para luego, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1753 de 2015 y la Resolución 1645 de 2016 modificado por la Resolución 1236 de 2023, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, realiza la auditoria de las reclamaciones que son presentadas, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a las reclamaciones fundamento de la obligación que recae a nombre del obligado, esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Luego de concluido el trámite anterior, y teniendo en cuenta que la ley 1066 del 29 de julio de 2006 en su artículo 5 dispone:

"FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".

Esta administradora, con el fin de hacer exigibles las correspondientes obligaciones, entre las que se encuentran las derivadas de las reclamaciones presentadas con ocasión a daño a terceros en accidente de tránsito que debieron ser asumidos por el Estado a través de la ADRES, mediante Resolución 037 del 19 de enero de 2018 estableció el Reglamento Interno de Cartera de la ADRES, allí se indica que luego del reconocimiento de una acreencia a favor de la Entidad que no conste en un título preexistente, se deberá constituir un título ejecutivo (resolución que ordena el cobro), el cual será ejecutado posteriormente a través del proceso de cobro coactivo reglamentado por el Estatuto Tributario, el cual inicia a partir de que se libra el respectivo mandamiento de pago.

Ahora bien, es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, debe expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT.

Es el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilita el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor.

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

En ese contexto, se debe entender que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para ello. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas tanto en vía administrativa como judicial. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño.

En atención a lo dicho, se entiende que el plazo de caducidad de la acción de repetición será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del mismo CPACA¹ y lo dispuesto en el artículo 106 inciso 4 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, lo cual ocurre cuando se efectúa el último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso. Esto último en aplicación de la misma regla contenida en la parte final del artículo 164-2 (i) del CPACA y porque el afectado no puede quedar indefinidamente expuesto a procedimientos judiciales o administrativos por parte del Estado.

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine, se evidencia que la **RESOLUCIÓN No. 0014229 del 3 de abril de 2024** que impone el pago de la obligación en contra del señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZ**, se expidió posterior a los dos (2) años con los que contaba la administración para poder hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, razón por la cual, entiéndase entonces que la oportunidad para expedir el acto administrativo por parte de la ADRES, feneció como quiera que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Entidad con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa **GDK19C**, fueron los días **26 de marzo de 2021, 22 de junio de 2021, 21 de septiembre de 2021 y 26 de octubre de 2021** y la expedición del título ejecutivo fue el día **3 de abril de 2024**; situación que evidencia la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición a favor de la Entidad.

ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA
Identificado: 12634738

Debe a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES
NIT: 901037916-1

A la fecha la suma de \$30,578,168.00

Id Reclamacion	Tipo Identificación	Numero Identificación	Nombres	Placa	Fecha Accidente	Numero Paquete	Numero Reclamación	Fecha Giro	Valor	Total Abonado	Saldo	Estado
1285201	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26022	12296113	26/03/2021	21,020,604.00	0.00	21,020,604.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1286108	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26022	12301537	26/03/2021	8,710,704.00	0.00	8,710,704.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1286273	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26022	12301807	26/03/2021	50,600.00	0.00	50,600.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1298231	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26043	12330943	22/06/2021	296,700.00	0.00	296,700.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1336299	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26069	12372002	21/09/2021	296,460.00	0.00	296,460.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1369645	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26083	12314067	26/10/2021	152,500.00	0.00	152,500.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA
1369666	CC	12634738	ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	GDK19C	07/11/2020	26083	12313526	26/10/2021	50,600.00	0.00	50,600.00	MANDAMIENTO DE PAGO_CISA

Fuente: <https://servicios.adres.gov.co/Otras-prestaciones/Reclamaciones/Reporte-Estado-Cuenta>

NUMERO DE RECLAMACIÓN	FECHA ACCIDENTE	FECHA DE PAGO DE LA RECLAMACIÓN	VALOR UNITARIO
12296113	07/11/2020	26/03/2021	\$ 27.665.093
12301537	07/11/2020	26/03/2021	\$ 11.464.106
12301807	07/11/2020	26/03/2021	\$ 66.594
12330943	07/11/2020	22/06/2021	\$ 384.526
12372002	07/11/2020	21/09/2021	\$ 379.816
12314067	07/11/2020	26/10/2021	\$ 195.343
12313526	07/11/2020	26/10/2021	\$ 64.815
VALOR TOTAL			\$40.220.294,00

Fuente: RESOLUCIÓN 14229 del 3 de abril de 2024

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que no es procedente dar continuidad al proceso de repetición en contra de la mencionada resultando procedente **REVOCAR** la **RESOLUCIÓN No. 0014229 del 3 de abril de 2024** por la cual se ordena el cobro de las obligaciones reconocidas y pagadas por la ADRES toda vez que si se continuara con

¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Oscar Darío Amaya Navas, Número Único 11001-03-06-000-2016-00095-00;06 de septiembre de 2017.

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"

el proceso se causaría un agravio injustificado, por lo cual se configura la causal 3 del artículo 93 la cual se menciona a continuación:

- "(...) Artículo 93 Causales de Revocación...
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
 3. **"Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".** (Negrilla fuera de texto) (...)"

En consecuencia, con el ánimo de resolver la situación administrativa y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos que anteceden, esta Dirección declarará la **CADUCIDAD** de la acción de repetición respecto a la obligación contenida dentro de las reclamaciones **12296113, 12301537, 12301807, 12330943, 12372002, 12314067 y 12313526**; y como consecuencia de ello, se ordenará el archivo de la actuación administrativa adelantada en contra del señor **LBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la **RESOLUCIÓN No. 0014229 del 3 de abril de 2024**, y en consecuencia **DECLARAR LA CADUCIDAD** dentro de la presente actuación administrativa respecto a la obligación contenida en las reclamaciones **12296113, 12301537, 12301807, 12330943, 12372002, 12314067 y 12313526** por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECRETAR la **TERMINACIÓN** y **ARCHIVO** de la actuación administrativa adelantada en contra del señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA** respecto a la obligación contenida en las reclamaciones **12296113, 12301537, 12301807, 12330943, 12372002, 12314067 y 12313526** de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor **ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **12.634.738**, en la dirección establecida para tal fin, conforme lo establece los artículos 57, 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

Destinatario	Dirección Física y Electrónica	Ciudad
ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA	lorayn_d_c19@hotmail.com ²	N/A

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

² Autorización – Orfeo 20256305603512

RESOLUCIÓN NÚMERO 168543 DE 2025

HOJA No. 9 de 9

Continuación de la Resolución: *"Por medio de la cual se revoca la Resolución 0014229 del 3 de abril de 2024"*

ARTICULO SEXTO: INFORMAR la presente decisión a la Oficina de Control interno disciplinario, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D.C., a los (04) días del mes de diciembre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por
Yasmín Escamilla B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.
Directora (E) de Otras Prestaciones

Elaboró: Estefania Santofimio S.- Contratista
Revisó: Rafael Enrique Roa - Abogado
Expediente: 12634738-ALBERNYS MARIANO ARCON ARIZA
Anexos: Sin anexos